

Migrantes ecuatorianos y políticas de Estado: un sujeto político en tensión

Introducción

Si bien la migración de ecuatorianos a otras geografías no es un hecho social nuevo¹, alcanza una mayor visibilidad política en la última década, debido no sólo a las características demográficas, sino también a las percepciones y discursos que se emitieron sobre este proceso.

Para inicios del nuevo siglo, la migración internacional de ecuatorianos había captado la atención de múltiples sectores de la sociedad, y pasó a posicionarse en la escena pública y mediática con mucha fuerza; ya que este flujo mostraba características distintas a otras experiencias migratorias en el país, especialmente en los perfiles, el incremento en las cifras de emigrantes, la diversificación en los lugares de origen y de destino seleccionado, así como por los elementos catalizadores y reactivadores de dicho proceso. En palabras de Herrera (2007): “la incidencia económica, social, política y simbólica de la migración ha sido muy marcada en Ecuador” (190).

En este artículo pretendemos ir más allá de las particularidades de la dinámica migratoria, para analizar el proceso conflictivo de politización de la migración a través de una aproximación a tres organizaciones motivadas por dicho proceso: la Asociación de Familiares de Migrantes Rumiñahui 9 de enero, la Asociación Ecuador Llactacaru y la Red Regional del Sur.

Este trabajo busca indagar sobre las potencialidades o limitaciones que rodean a la constitución de los colectivos de migrantes como nuevos sujetos políticos relevantes en el escenario nacional. Interesa, entonces, entender a las organizaciones que trabajan en torno a la migración como formas de acción sobre lo social que surgen en un momento de redefinición de las relaciones entre Estado y sociedad en el Ecuador; momento que a su vez refleja redefiniciones similares en una escala global.

Para ello, nos detenemos en ciertas tensiones políticas que marcan la relación entre Estado y migrantes desde finales de la década de 1990. Tensiones que serán desarrolladas y puestas en manifiesto a lo largo del artículo, y que precisamente, llevan

¹ Al trazar una retrospectiva en el tiempo, encontramos que desde 1940 existe población inmigrante ecuatoriana en Estados Unidos. Durante la década de 1951-1960, esta población se cuadruplicó en número. En la década 1961-1970 este crecimiento continuó en aumento (Herrera, Carrillo, Torres; 2005:17). Kyle (2005) señala que todos estos períodos comprenderían la migración pionera de ciertas comunidades de la región sur del Ecuador, especialmente de las provincias del Azuay y el Cañar, sobre todo de las zonas rurales.

a preguntarse sobre los modos de acción política que se generan en las dinámicas migratorias: aquellas que, por un lado, llevan a cuestionar lógicas hegemónicas de poder; y por otro lado, se insertan en mismas lógicas a partir de su funcionalidad a proyectos de corte neoliberal, implementados de maneras diferentes en el país de origen y de destino.

El presente trabajo se divide en tres etapas. En una primera parte construiremos el estado del arte de dos campos de estudio académico que permitirán interpretar la problemática planteada. Una segunda etapa presentará las trayectorias de acción de ciertos procesos de organización y acción en torno a la migración ecuatoriana; para luego examinar determinadas variaciones estratégicas en los discursos de identidad de estos colectivos; y por último, se analizará las estrategias de participación y posicionamiento de estos actores en el espacio político².

Estado del arte

En este acápite, pasaremos revista a dos áreas de producción académica. En primer lugar, los estudios sobre la migración ecuatoriana permitirán entender cómo se origina la nueva oleada migratoria en relación con la crisis del Estado. Por otro lado, se identificará en este campo académico las miradas que han prevalecido sobre el proceso migratorio ecuatoriano, así como aquellas perspectivas que dan cuenta de la creciente politización de las migraciones en la escena pública.

Sin embargo, esta última dimensión ha sido escasamente abordada y por tanto será preciso recurrir a un segundo ámbito de producción académica: la literatura que aborda la temática de movimientos sociales. Ésta proporcionará herramientas para entender las estrategias de acción que los migrantes adoptan frente a los Estado de origen y destino.

La migración internacional de ecuatorianos: una entrada académica

Al rastrear la literatura desde donde ha sido abordada la migración de la última década encontramos que existen varios ejes de estudios, sin embargo para fines de nuestro debate nos concentraremos en aquellas miradas que ponen énfasis en las causas

² Si bien la investigación arrojará que existen niveles de incidencia política de los migrantes tanto en origen como en destino, hemos dado un peso mayor al proceso en origen, pues se trata de producir una investigación que reflexione, en su mayor parte, sobre el contexto ecuatoriano en las últimas dos décadas. Sin embargo, a lo largo del análisis se hará referencias puntuales a la presencia de las organizaciones en los países de destino, pues consideramos que el caso de estudio no se puede comprender sin hacer referencia a un cierto marco de acción transnacional que se evidencia en los procesos organizativos.

económicas de la migración, la formación de redes sociales transnacionales y las dimensiones políticas de la migración.

Un factor que al respecto ha sido detectado por Herrera, Carrillo y Torres (2006) es que, en la época anterior al 2000, los estudios que abordan la temática migratoria son escasos. Paralelamente, a la masividad del flujo de los noventa, “un boom de estudios que en un principio buscaron fundamentalmente explicar las causas de este éxodo” fueron apareciendo en la producción académica. Herrera (2007) afirma que “uno de los temas que mayor atención ha prestado en los estudios académicos es aquella que se enfoca en explicar las causas migratorias”. Dentro de esta literatura, hemos encontrado algunos debates. El primero, aquel que desde una visión macro estructural y/o economicista ha visto las condiciones adversas en lo económico, lo político y lo social, como las razones suficientes para desencadenar la “expulsión de miles de compatriotas” a finales de los noventa. (Acosta, López y Villamar, 2006; Gratton, 2005; Jokisch y Kyle 2005; Sánchez, 2004; Vallejo, 2004).

Por otro lado, están los estudios que evidencian cómo la conformación de redes sociales en destino y origen hace que exista un flujo continuo de ideas, imágenes, y expectativas de vida que va y viene, construyendo un “repertorio de acción migratoria” (Ramírez y Ramírez, 2006). Muchos de los estudios que dan cuenta de la importancia de las redes en la migración internacional, no desconocen que existieron también “causas estructurales” que fueron elementos más bien catalizadores de la salida.

Otros estudios a su vez, muestran desde una perspectiva “culturalista” (Herrera, 2007) como el motor que genera la partida es de carácter subjetivo, atravesado por los imaginarios.

Goycochea y Ramírez plantean que la decisión de emigrar estuvo apuntalada por imágenes de los medios de comunicación, relatos de los familiares en el exterior, circulación de información al interior de las redes sociales, elementos que alimentaron “el deseo” y la “ilusión” de salir” (Herrera, 2007).

Por otro lado, también están aquellos estudios que utilizando la lente de la economía política feminista (Herrera, 2008; 2007; 2005) muestran cómo las mujeres se insertan en las dinámicas internacionales migratorias a través de las llamadas cadenas globales del cuidado, que se forman a través de una crisis de reproducción social de los estados, tanto en destino como en origen (Herrera, 2007). En esta línea se encuentran también aquellos estudios que evidencian que a más de un mercado laboral ofertado en destino, son las condiciones de desigualdad de género en origen las que impelen a las mujeres a migrar (Camacho, 2004; Carrillo, 2005).

Otros estudios, a más de explicar la “vertiginosa partida” (Herrera, 2007) o la “estampida migratoria” (Ramírez y Ramírez, 2005) dan cuenta de la conformación de redes sociales en origen y destino como mecanismos alternativos de reproducción social. En este sentido el estudio de las redes “transnacionales” han cobrado una relevancia significativa en los estudios sobre migración. Frente a esta mirada los estudios han visibilizado como la construcción de redes sociales de carácter transnacional permiten aminorar las ansiedades de la partida, el viaje y el asentamiento.

Dentro de esta misma línea, los estudios que se enfocan en la migración y el género, han direccionado la lente hacia cómo la conformación de redes sociales reproducen redes del cuidado transnacional, como un mecanismo que por un lado, permite a muchas mujeres insertarse en mercado laboral del cuidado; y por otro, estas mujeres garantizan el cuidado de sus hijos en origen al contar con una red de mujeres, amigas, vecinas, parientes y abuelas que cuidan a sus hijos.

En este período en el que ha proliferado la producción académica en las áreas revisadas, la dimensión menos presente entre los debates ha sido aquella que se refiere al campo político generado en torno a la migración. Cuando analizamos los estudios que ponen evidencia la dimensión política hemos distinguido dos tendencias.

La primera, aquella que pone sobre el debate la relación entre la migración y las políticas públicas. Este tipo de análisis se centra en evaluar los aspectos normativos y jurídico-institucionales a través de los cuales el Estado reacciona o no frente a la migración. (De la Vega y Yupanqui, 2004; Ponce Leiva, 2005). La segunda entrada analítica se orienta más bien a reflexionar sobre los imaginarios y discursos implícitos en las relaciones entre migrantes y Estado; o abordan desde una perspectiva crítica los efectos sociales de los modelos estatales vigentes en los países de origen y de destino (Vallejo, 2004; Herrera, 2008; Domenech, 2009).

Por su parte la relación entre migración y ciudadanía ha sido aún menos analizada. Al respecto encontramos nuevos estudios que, a través de una reflexión sobre el voto migrante, intentan mostrar las especificidades que adquiere el ejercicio del derecho al voto en el contexto del proceso migratorio (Moreno, 2006; Boccagni, 2007).

Entonces, los estudios sobre migración que exploran las causas económicas, así como las perspectivas sobre la reproducción social del género, muestran una estrecha relación entre la crisis y la última oleada migratoria; relación que será estudiada con mayor detenimiento en el transcurso de este trabajo. Al mostrar cómo los estudios que abordan la temática política son menos numerosos, nuestro interés será justamente

construir una mirada que no sólo se apoye en los hallazgos de las investigaciones descritas, sino que también aporte con la reflexión entre migración, política y crisis; a partir de una lectura que problematice la creciente politización de las migraciones en la escena pública.

En búsqueda de un nuevo marco interpretativo

Como hemos visto, los estudios sobre migración ecuatoriana realizados hasta el momento no se han ocupado –con escasas excepciones- de analizar aspectos centrales sobre las dinámicas políticas que se generan en torno a la migración. Se abren, entonces, interrogantes respecto a las relaciones que se establecen entre los estados de origen o de destino con los migrantes; respecto al tipo de políticas que generan los estados frente a la migración; o respecto a las formas de acción que evidencian los migrantes, en su condición particular, paradójica, de “pertenecer a un lugar en el que no se habita y habitar un lugar al que no se pertenece” (Araujo, 2009).

Evidentemente, dicha condición pone en cuestión los órdenes bajo los cuales se ha construido el Estado-nación, así como las categorías de nacionalidad y ciudadanía, a través de las cuales se han establecido tradicionalmente las relaciones entre los estados y las sociedades circunscritas a sus territorios. En este sentido, se puede prever el surgimiento de nuevas lógicas de acción de los sujetos migrantes, sobre todo en relación a los conflictos que derivan del cuestionamiento de la ciudadanía y pertenencia de estos sujetos, tanto en origen como en destino. Efectivamente, en el escenario de estudio se manifiestan indicios de formas de acción y organización política a las que recurren los migrantes ecuatorianos para interpelar a los estados, tanto al español como al ecuatoriano.

Las perspectivas de análisis sobre los movimientos sociales resultan, entonces, pertinentes para entender cómo se constituyen los migrantes en tanto sujeto político. Si bien desde la sociología clásica se ha intentado dar respuesta a la cuestión de por qué las personas se movilizan colectivamente; interesa en este trabajo tomar aportes desde líneas teóricas más recientes, las cuales se ocupan más específicamente de los movimientos sociales, a partir de un momento histórico donde precisamente empieza a ponerse en cuestión el sistema *welfarista*, basado en el Estado-nación –décadas de 1960 y 1970- (Gómez, 2001: 40-48).

Estos aportes teóricos pueden arrojar luces sobre la participación y el protagonismo político de los migrantes, si se toma en cuenta que los movimientos

sociales adquieren relevancia en contextos donde se organizan demandas sociales por la democratización y la reivindicación de derechos específicos; y donde, además, las instituciones políticas formales no son capaces de actuar como representantes de estas demandas ante los estados (García Linera, 2004: 5).

Este es precisamente el caso de los migrantes ecuatorianos en tanto sujetos políticos. Al poner atención a la dimensión transnacional de la dinámica migratoria, se puede constatar que las demandas de la población que emigra se dirigen tanto al Estado de origen como a los de destino –en nuestro caso, España-. A su vez, estas demandas no han encontrado asidero en ninguno de los dos sistemas políticos³. Veremos, entonces, que los conflictos con los estados y las sociedades de referencia de los migrantes se han intentado resolver a través de otros mecanismos.

Uno de aquellos mecanismos puede considerarse, precisamente, la organización colectiva para plantear demandas en los espacios políticos formales. Las distintas escuelas que se ocupan de los movimientos sociales han arrojado variadas definiciones sobre los grupos de acción colectiva. Para el caso de estudio optaremos por el siguiente planteamiento de Oberschall, quien mira a los movimientos sociales “como actores colectivos plurales, conformados por una variedad de organizaciones dotadas de intereses propios, que se proponen definir un objetivo común, un cambio social, cultural o político que permita que sus intereses sean reconocidos” (García Linera, 2004: 5).

La acción colectiva desplegada por los migrantes ecuatorianos en la última década constituye, sin embargo, solo uno de los puntos en tensión dentro de la problemática a estudiar. Dichas acciones se insertan en determinadas dinámicas políticas de los contextos de destino y origen. Dado el mayor énfasis que se pondrá en esta investigación a la sociedad de origen, es necesario adoptar una perspectiva de análisis que permita relacionar las acciones de los colectivos de migrantes con los procesos históricos que ocurren en el Ecuador, de tal modo que se apunte a comprender las relaciones entre los migrantes y el Estado en un momento donde está presente la tensión del cambio frente a la reproducción de un orden de dominación simbólica y material.

Al analizar el contexto histórico en que se enmarcan las demandas de los migrantes, será posible identificar ciertas formas de “oportunidad política”, tanto para la

³ No obstante, en los últimos años existen evidencias de una cierta incorporación de los migrantes a los espacios políticos formales de ambos estados, particularmente, del Estado ecuatoriano. Ejemplo de esto es la participación de seis representantes en la Asamblea Constituyente de 2007-2008, correspondientes a las jurisdicciones extraterritoriales de Estados Unidos, Europa y América Latina. En destino, por otra parte, el Partido Popular español (PP) cuenta entre sus filas con un dirigente ecuatoriano. Si bien estos indicios son aún muy recientes, nos ocuparemos de ellos más adelante.

acción del colectivo migrante como para la politización en sí del tema de la migración en el escenario político. Este escenario se analizará, entonces, desde la corriente de la estructura de oportunidad política, entendida en estos términos:

Por lo general, el régimen político de un país está en permanente cambio regular, sin embargo, hay momentos en que estos cambios se producen de manera abrupta o afectan la estabilidad institucional o el sistema de alianzas de los sujetos políticos. Se abren entonces “oportunidades políticas” que emiten señales que pueden ser percibidas por otros agentes sociales y que los animan a utilizar recursos disponibles para levantar un movimiento. (García Linera, 2004: 10).

Si bien esta conceptualización parte de la escuela de movilización de recursos, se puede sumar a esta perspectiva la idea de los “procesos políticos”, desarrollada sobre todo en los estudios inspirados por Charles Tilly (McAdam, McCarthy y Zald, 1999). Esta línea de trabajo se basa en el supuesto de que “la mayoría de los movimientos políticos y revoluciones se catalizan debido a cambios sociales que convierten al orden político establecido en algo más vulnerable o más receptivo al cambio” (Ibíd., 30).

Según estos autores, el modelo de los procesos políticos pone un énfasis importante en “la importancia de las ideas compartidas y socialmente construidas a la hora de explicar la acción colectiva” (Ibíd., 27). Uno de los planteamientos principales de este trabajo se dirige precisamente a mostrar la importancia de la construcción social de ciertos discursos sobre los migrantes en relación con los procesos organizativos que desarrollan.

Este elemento se profundizará a partir de la escuela de los marcos interpretativos, inspirada en la línea del interaccionismo simbólico (Goffman), que permite considerar “los significados compartidos, las estructuras simbólicas y los esquemas cognitivos que organizan la percepción y la dirección de la acción colectiva” (García Linera, 2004: 10). A través de este enfoque se analizará el ámbito de la producción discursiva de las organizaciones de migrantes, para ubicar las contraposiciones o coincidencias que ésta presenta respecto del discurso hegemónico sobre los migrantes construido en el período histórico en cuestión.

Por otra parte, se buscará explicar, desde el modelo de los marcos, las construcciones identitarias que han permitido a las asociaciones de migrantes, por un lado, configurar una estrategia de aglutinamiento y cohesión al interior de su organización; y por otro lado, organizar la confrontación, legitimar sus acciones y direccionar sus demandas. En suma, se trata de indagar acerca de cómo las asociaciones de migrantes construyen su marco referencial para movilizarse.

Este paso analítico, da lugar a la comprensión de la movilización simbólica de recursos que acompañan a los movimientos. La perspectiva de los marcos abre entonces, la posibilidad de indagar sobre cómo los distintos colectivos utilizan estrategias discursivas y marcos de significados con los que se interpretan, aglutinan y construyen sus demandas. Si bien el primer paso en esta línea fue dado por Goffman, la teoría de los marcos para la acción colectiva intenta no sólo mirar

(...) los valores, las creencias y las normas de individuos particulares que se agregan para impulsar la acción, sino en los entendimientos y sentimientos que de manera intersubjetiva se configuran en asociación durante el mismo proceso de acción colectiva, acudiendo a la sabiduría popular, al conocimiento de la experiencia y a los repertorios de las culturas políticas que circulan por los medios de comunicación.

Melucci (1994) identifica tres aspectos claves para la configuración de los marcos para la acción colectiva. El primero, es que los movimientos sociales apelan a la solidaridad como mecanismo de aglutinamiento y cohesión; segundo, identifican las injusticias desde donde redefinen su estrategia y definen a sus oponentes, y tercero, provocan rupturas en las fronteras del poder. Bajo esta perspectiva los movimientos sociales son en sí mismos “agencias de significación colectiva” que interpelan los discursos hegemónicos a partir de la producción de nuevos significados que se traducen en las acciones colectivas que provocan.

A continuación, planteamos un escenario político en tanto antecedente del contexto de oportunidad política en el que surgen y se visibilizan las asociaciones de migrantes en el Ecuador. Los elementos recuperados de procesos históricos nacionales apuntan, sobre todo, a reconstruir un referente de las formas que ha tomado la disputa política entre el Estado ecuatoriano y ciertos sectores sociales.

Escenario de estudio

Entre las décadas de 1960 y 70 Ecuador mantiene una relativa estabilidad económica a través del ingreso al mercado internacional como país exportador de banano y luego de petróleo, dentro de un modelo económico desarrollista de sustitución de importaciones. “Sin embargo, a fines de 1970 junto con la estabilización de los precios del petróleo, la inversión pública no puede sostenerse, teniendo que recurrir al endeudamiento externo que coloca al país en una coyuntura crítica en los años ochenta” (FLACSO, 2009: 25) Esta situación se reflejó rápidamente en “las altas tasas de interés, cierre de mercados financieros internacionales, disminución de exportaciones, caída del

precio del petróleo [así como en las] dificultades para sostener el pago del servicio de la deuda externa y condujo a que se activen las presiones -internas y externas- para revisar la política económica” (Acosta, 2001).

En este contexto económico, a finales de los años setenta, el Ecuador entró en la llamada ola democrática, como un proceso que venía gestándose en América Latina post dictaduras y gobiernos militares. Este paso “democrático” en el Ecuador estuvo marcado por la redacción de la dieciochoava Carta Constitucional (1978) y el llamado a elecciones democráticas (1979), que con un “triunfo inesperado sobre las derechas da paso a un gobierno surgido de una inusitada alianza entre un partido populista CFP, de fuerte raigambre popular en Guayaquil, y un partido doctrinario de centro, la Democracia Popular (...) con alguna influencia serrana” (Araujo, 2007).

El retorno a la democracia, significó en este sentido, por un lado, iniciar con un proceso al menos formal de democratización institucional, y por otro lado, este “retorno” significó también implementar un nuevo modelo económico producto del escenario crítico de finales de los años setenta, basado en la apertura económica hacia los mercados internacionales a partir del incentivo hacia las exportaciones primarias.

Este modelo económico se empieza a implementar desde el año de 1983, mediante medidas firmadas en las sucesivas cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional, las mismas que buscaban incentivar el desarrollo de una economía neoliberal. Durante la segunda mitad de los años ochenta, estas medidas se implementan con fuerzas a través de los llamados Programas de Ajuste Estructural (PAE), definidos en las cartas de intención que perfilan los lineamientos de la nueva política económica.

Durante estos mismos años la protesta política se radicaliza a través de la acción de sectores sindicales como el FUT, o de grupos insurgentes como Alfaro Vive Carajo (AVC) y Montoneras Patria Libre que se posicionan en el escenario público para demandar transformaciones en el sistema político y económico.

En respuesta a esta creciente oposición popular, el régimen de gobierno de la segunda mitad de la década de los ochenta emprende una política de desarticulación de la oposición a través de medidas represivas que van desde la coacción al legislativo hasta el empleo de grupos de inteligencia para-legales. Estas medidas logran hasta cierto punto debilitar estas formas de protesta organizada.

Sin embargo, y paralelamente a este escenario, durante los mismos años, se fortalecen organizaciones indígenas como la Confederación Amazónica (CONFENIAE) y la Confederación Nacional (CONACNIE) que se sumaría a una ya existente

denominada ECUARUNARI, las mismas que más tarde confluirán en la CONAIE, que tendrá clara incidencia nacional a partir de 1990.

En ese año, la CONAIE, lidera el primer levantamiento indígena, que no solo demanda una reorientación de las medidas adoptadas sino que también posiciona reivindicaciones en el ámbito cultural. Tales como el reconocimiento del Ecuador como un Estado plurinacional. Esto genera un impacto no sólo político sino simbólico que permite una presencia cada vez más reconocida y legítima del movimiento indígena en el espacio de la política formal.

Paralelamente al movimiento indígena, se hace visible durante esta década la presencia de organizaciones de mujeres que también luchan por reivindicaciones en el espacio simbólico de la dominación. En este sentido en el Ecuador se configura una plataforma para la visibilidad de demandas en torno a las desigualdades que rebasan lo económico, es decir, la cuestión de clase.

Sin embargo, mientras movimientos como el de mujeres y el indígena ganan mayor visibilidad, los gobiernos de los años noventa insisten en la implementación de un proyecto de corte neoliberal, promovido por los organismos internacionales tales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). Es así como en estos años se observa la exacerbación del modelo económico en detrimento de las políticas bienestar social.

Estas medidas de ajuste estructural, no obstante, no desembocan en la implementación absoluta del neoliberalismo en el Estado, pues como advierte Acosta (2001) “ lo tortuoso del ajuste hay que entenderlo también como resultado y parte de una institucionalidad sustentada en el paternalismo, el rentismo, y la corrupción/impunidad” (2001: s/p).

En este sentido, podemos hablar de un retroceso problemático de las demandas sociales, pues si, por un lado, el neoliberalismo adquiere un carácter particular al empatar con la configuración histórica de la sociedad ecuatoriana; por otro lado, en este período se evidencia también el fortalecimiento de procesos organizativos por parte de nuevos sectores sociales.

El Estado, entonces, aparece como el espacio de un campo de disputas en el que, por un lado se promueve un proyecto hegemónico marcado por las reformas neoliberales y por otro lado se elaboran propuestas alternativas que permanentemente disputan esta hegemonía. Desde el feminismo latinoamericano se ha reflexionado en este sentido bajo una perspectiva que mira al Estado “de manera más ambivalente y

heterogénea, como potencial productor de espacios de igualdad (...) y al mismo tiempo como reproductor de desigualdad de otros espacios como el de las políticas económicas” (Herrera, 2001: 81).

Paulatinamente, este escenario se irá polarizando a lo largo de la década. De modo que hacia el año de 1999, se genera un desequilibrio económico insostenible marcado por indicadores como el decrecimiento del PIB en un 7% en 1998 respecto del año anterior, cifra que alcanza un 9% en 1999; el desempleo en las ciudades prácticamente se duplica entre 1998 y 1999; la inflación en 1999 supera el 60% y la relación entre la proporción de los ingresos en manos del 10% más rico y el 10% más pobre de los hogares pasa de 41 a 49 veces (SIISE, 2002). La crisis económica se agudiza con la desestabilización del sistema financiero, que lleva al gobierno a adoptar la medida de “congelamiento” de las cuentas bancarias durante un año, a partir de marzo de 1999. A inicios del 2000, se anuncia la dolarización como medida paliativa frente a la especulación cambiaria sobre el dólar.

La crisis se manifiesta también en el ámbito político, con el antecedente del derrocamiento del presidente Bucaram en 1997. El rechazo frente a las medidas económicas de 1999 y 2000 moviliza la protesta popular. Varios sectores organizados y no organizados de la sociedad confluyen en el derrocamiento de Jamil Mahuad el 21 de enero de 2000, encabezado por una alianza entre el movimiento indígena y un grupo de militares.

En este contexto histórico se inscribe la intensificación sin precedentes de la migración en el país. Este proceso social presenta cifras significativas desde la década de 1960 (Herrera, Carrillo y Torres, 2005). Los registros de la Dirección Nacional de Migración muestran un saldo migratorio que se mantiene estable en alrededor de 20 000 personas, entre 1976 y 1992 (FLACSO-UNFPA, 2008). Estas cifras, sin embargo, aumentan considerablemente desde 1993, y esta tendencia creciente llega a su pico más alto en el año 2000, con un saldo migratorio de 175 000 personas —el más alto hasta el día de hoy—.

Este proceso no solo se diferencia de los flujos migratorios internacionales de décadas anteriores por su volumen, sino también por los perfiles sociales de quienes lo protagonizan. En este sentido, encontramos una migración con características heterogéneas respecto a su distribución geográfica, tanto en origen como en destino; así como una presencia de las mujeres como pioneras de los proyectos migratorios. Junto a ello, la nueva migración presenta un origen socio-económico de marcado carácter

urbano, y que se mantiene en el tercer quintil de ingresos, de modo que los migrantes pertenecen en su mayoría a un sector medio, y no necesariamente al más pobre (FLACSO-UNFPA, 2008), como aún suele difundirse mediáticamente.

En relación con el escenario descrito, la salida masiva de ecuatorianos ha sido directamente vinculada con la crisis de fin del siglo XX. Si bien es evidente que factores estructurales en origen y destino catalizaron la decisión de emigrar en un elevado número de familias; es importante profundizar en la relación entre migración y crisis, para evitar una perspectiva simplificada del proceso, pues numerosos estudios han demostrado una multiplicidad de causas presentes en la decisión de partir (Goycochea y Ramírez, 2002; Herrera y Martínez, 2003; Vallejo, 2004; Camacho y Hernández, 2005; Ramírez y Ramírez, 2005; Pedone, 2005).

No obstante, a nivel mediático, y en general, de la opinión pública, se construyeron imaginarios y ansiedades sociales en torno a la migración, que generan una imagen victimizante del sujeto migrante; al ligarlo con un fracaso del proyecto nacional manifestado en la crisis (Eguiguren, 2009). Ello se traduce, por ejemplo, en la idea de desestructuración de la familia y del espacio privado, atribuida a la migración, a partir de la salida creciente de mujeres con hijos o familiares dependientes que permanecen en el país; lo cual problematiza la representación esencialista de la familia nuclear (Herrera, Carrillo y Torres, 2005; Ramos, 2009).

Junto a esta representación, a partir del impacto de las remesas en la economía nacional⁴, se construye al migrante como un sujeto económico, capaz de recuperar la economía nacional tras la crisis. En este sentido, el migrante adquiere legitimidad en el espacio político en tanto “héroe”, y desde ahí se posicionan múltiples discursos estatales que justifican la necesidad de políticas frente a la migración, así como la apertura de espacios formales de participación (Araujo, 2009).

En este sentido, las políticas del Estado en respuesta a la migración dan cuenta de una politización sin precedentes en torno a esta problemática⁵. En este contexto de oportunidad política donde se abren “canales colectivos, tanto formales como informales” (McAdam, McCarthy y Zald, 1999: 24) de movilización y organización de los migrantes; así como se activa la gestión del Estado frente a la población migrante.

⁴ Las remesas se convierten en el segundo rubro de ingresos nacionales a partir de 2000 (FLACSO-UNFPA, 2008).

⁵ Cabe señalar que la normativa migratoria vigente hasta el día de hoy, que permanece inalterada hasta 1998, data de la década de 1970. Sólo a finales de los años noventa se registra un incremento en los debates en torno a política y legislación migratoria, tanto en el ejecutivo como en el legislativo.

Durante la década de 2000, la relación entre el Estado y los migrantes está marcada por algunos ejes, entre ellos, la construcción de vínculos simbólicos, un creciente énfasis en los derechos humanos, un incremento de programas y políticas que vinculan la migración con el desarrollo y el reforzamiento de mecanismos de control y regulación (Araujo y Eguiguren, 2009). Estos ejes determinan un escenario de disputas frente a los sentidos con que la migración se hace presente en la política, a partir de la acción del Estado, organizaciones de migrantes y un creciente número de ONG que se movilizan en torno al tema.

A partir de 2007, es posible identificar un proceso de institucionalización de la migración en el Estado, evidenciado en nuevos espacios como la Secretaría Nacional del Migrante (Senami) y la participación de seis representantes de los ecuatorianos en el exterior en la Asamblea Constituyente y más tarde, en la Asamblea Nacional. Esto se inscribe en el proyecto de restauración nacional emprendido por el gobierno de Rafael Correa. Dentro de este gobierno, los migrantes constituyen un sector poblacional prioritario en la agenda política, en la medida en que se representan como las víctimas manifiestas de la crisis producida por el neoliberalismo⁶.

Es en este contexto de oportunidad política en el que se enmarcará el siguiente análisis, centrado en los procesos de organización de las dos principales asociaciones de migrantes ecuatorianos: Asociación de Familiares de Migrantes Rumiñahui 9 de enero y Asociación de Migrantes Ecuador Llactacarú⁷, así como la Red Regional del Sur⁸, que agrupa a distintas organizaciones de la iglesia católica, de la sociedad civil y del Estado en las cinco provincias del sur del país: Azuay, Cañar, Loja, Zamora, Machala⁹.

En las siguientes líneas examinaremos los procesos de configuración y consolidación de las formas identitarias y organizativas que establecen cada una de estas asociaciones.

⁶ Ver plan de gobierno de Alianza País para las elecciones presidenciales de 2006, en la sección “Política de Migración. El rescate de la Patria es tarea de todos y de todas”.

⁷ Estas asociaciones surgen a partir de la emigración ecuatoriana a España, y por tanto, su eje de acción se circunscribe a estos dos países. Quedan fuera de este análisis las organizaciones ecuatorianas en Estados Unidos e Italia, los dos principales destinos luego de España.

⁸ A lo largo del artículo se emplearán nombres más cortos para referirse a las asociaciones: Llactacarú, Red del Sur y Rumiñahui. En el caso de esta última, que mantiene una división en España y otra en Ecuador, se hablará en general de “Rumiñahui” para referirse a la delegación ecuatoriana, y se indicará específicamente “Rumiñahui Hispano Ecuatoriana” cuando se haga referencia a la organización en España.

⁹ Si bien en un primer momento se limitó la investigación hacia las asociaciones de migrantes y familiares de migrantes, se consideró la pertinencia de incluir una agrupación proveniente de la región sur dada la incidencia de la migración en esta zona. La agrupación más representativa ha sido la Red Regional del Sur. Además, esta permite examinar la incidencia de la iglesia en el tema de migración.

Procesos organizativos

Asociación Rumiñahui

La Asociación Rumiñahui Hispano Ecuatoriana para la Integración de los Pueblos se crea en España en 1997, conformada por ecuatorianos y españoles, algunos de ellos provenientes de otros procesos políticos y organizaciones sociales. En los primeros años combinan actividades de movilización frente a la creciente tendencia restrictiva de las políticas migratorias españolas, con la oferta de servicios jurídicos para migrantes, como parte del proyecto “Red Jurídica”¹⁰. La asociación, además, ofrece servicios psicológicos¹¹, mantiene actividades culturales –artesánías, gastronomía- y evidencia algunas formas de acción transnacional “desde abajo”, en términos de Portes, Guarnizo y Landolt (2003), tales como la donación de recursos a proyectos colectivos en el país de origen.

En 2001, el accidente automovilístico en el que mueren 12 ecuatorianos en Lorca (Murcia), genera una etapa de intensa protesta, a la que se suman organizaciones de migrantes de distinto origen y sectores sociales españoles. En este contexto se organiza una marcha conocida como “Marcha de los 50 kilómetros”, así como una serie de actos simbólicos en el espacio público. A ello se suma una serie de medidas del gobierno español que restringen el acceso a formas de trabajo y residencia regular. La asociación Rumiñahui decide, entonces, conformar una “delegación” en Ecuador, que en principio, organizara procesos de asesoría jurídica para suplir necesidades de información de migrantes y familiares que permanecieron en Ecuador (E.L., entrevista, 2009). Se forma entonces la Asociación de Familiares de Migrantes Rumiñahui 9 de enero.

En un principio, esta asociación convoca a algunos episodios de movilización en rechazo de la situación en España, pero más adelante se articula a las movilizaciones iniciadas por otras organizaciones sociales ecuatorianas, las cuales giran en torno a los efectos de la crisis nacional, y concretamente, de las políticas económicas promovidas por los gobiernos de Mahuad y Noboa.

No obstante esta articulación con demandas más amplias que disputan el proyecto de Estado neoliberal, más adelante Rumiñahui posiciona estratégicamente la cuestión de la migración desde estos procesos de movilización. En 2002 varias organizaciones

¹⁰ Proyecto auspiciado por el gobierno español, cuyo objetivo era ampliar la cobertura de los procesos de regularización laboral de inmigrantes (www.ruminahui.org).

¹¹ Uno de los miembros fundadores de la asociación es un psicólogo español.

sociales ecuatorianas, lideradas por el movimiento indígena, exigen al gobierno la apertura de un proceso de diálogo nacional. Se llevan a cabo, entonces, una serie de mesas temáticas de diálogo entre los sectores sociales y el gobierno. Rumiñahui consigue que una de estas mesas aborde la migración, y plantea en ese marco ciertas demandas específicas, entre ellas: la creación de un fondo de “ayuda” a los migrantes y sus familiares; la disminución de los costos de envío de remesas y la mediación del Estado en las deudas adquiridas por un gran número de migrantes en el sector informal –conocido como “chulco”-. En cuanto a estas demandas, el gobierno acepta la creación del “Programa de Ayuda, Ahorro e Inversión para los migrantes ecuatorianos y sus familias”¹².

En los años siguientes, la asociación promueve procesos organizativos ente familiares de migrantes, sobre todo jóvenes y mujeres. Entre estos procesos, uno de los espacios que aglutina a los familiares es el grupo de “acompañamiento psico-afectivo” que ofrece la asociación, a través de los servicios voluntarios de profesionales en el área de psicología (E.L., entrevista, 2009).

En cuanto al financiamiento de las actividades de la asociación, ésta desarrolla formas de auto-gestión, que van desde la donación de recursos de los miembros hasta la venta de “módulos de formación”, con lo cual se apuntaría a evitar la dependencia política que implicaría recibir subvenciones de organismos financieros (Ídem). Sin embargo, esta postura de autonomía respecto de ONG, organismos multilaterales y del Estado, se encuentra matizada por la participación de Rumiñahui en algunos proyectos planteados por estas organizaciones¹³.

En los últimos años –a partir de 2006- existe un replanteamiento de los objetivos de la asociación, motivada por la posición de la misma frente al actual gobierno ecuatoriano. Ello está marcado por una diferencia de posturas entre las organizaciones en España y en Ecuador. La Asociación Rumiñahui Hispano Ecuatoriana se mantiene relativamente alineada con las políticas del gobierno de Correa, lo cual muestra su

¹² El programa fue creado por decreto ejecutivo en 2002 (Ver Registro Oficial del 5 de marzo de 2002), y dotado de un fondo anual de cinco millones de dólares. Sin embargo, la estructura de este programa, adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, nunca fue conformada, de modo que el fondo no podía ejecutarse. En el gobierno de Correa este fondo pasa a ser administrado por la Senami.

¹³ Entre ellos, se puede mencionar la colaboración de Rumiñahui con el Fepp (organismo de cooperación internacional vinculado a la iglesia Católica), la participación de la asociación en la Casa del Migrante (proyecto del municipio de Quito orientado hacia la oferta de servicios sociales para migrantes) y su reciente postulación a un concurso de financiamiento de proyectos de desarrollo auspiciado por la Unión Europea y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), junto a una ONG española; con un proyecto sobre gestión de remesas.

máxima expresión en la candidatura de la presidenta de la asociación, Dora Aguirre, a la Asamblea Nacional en las elecciones de abril de 2009, por la jurisdicción de Europa¹⁴. Mientras tanto, Rumiñahui 9 de enero se muestra cada vez más distante del gobierno actual, con fuertes críticas dirigidas a lo que –consideran- sería un gobierno con un discurso de izquierda, pero que se mantiene en una línea neoliberal.

Por otro lado, el momento de transformación que experimenta Rumiñahui se debe a procesos de reflexión interna, que se cuestionan sobre el rumbo que debe tomar la organización, cuando, según uno de sus voceros, Rumiñahui ya ha cumplido ciertos “momentos” como el de protesta y el de servicios sociales (E.L., entrevista, 2009).

Asociación Llactacaru

Al igual que la asociación Rumiñahui, Ecuador Llactacaru se crea en España en 2001. Esta asociación nace en Barcelona, con el “nombre explicativo” de Asociación de Inmigrantes Ecuatorianos en Catalunya para la Solidaridad y la Cooperación (Llactacaru, 2001). Si bien en un primer momento la asociación se plantea una relación con Rumiñahui, finalmente se opta por un proceso organizativo autónomo (Ídem).

Uno de los primeros miembros de esta organización ve a la formación de la misma como una necesidad política, en tanto hasta ese momento, los ecuatorianos en España mantenían organizaciones exclusivamente dedicadas a actividades culturales, mientras que otros colectivos de inmigrantes formaban parte de la “Asamblea de los sin papeles” en el año 2000 (E.P., entrevista, 2009). Es en esa plataforma que empieza a formarse Ecuador Llactacaru.

Las primeras acciones de la organización reflejan, efectivamente, inquietudes políticas, que van desde la reflexión sobre la situación local de los migrantes ecuatorianos (en Barcelona) hasta la organización de encuentros entre Llactacaru y representantes de sectores políticos ecuatorianos, tales como Pachakutik o el partido Izquierda Democrática (Llactacaru, 2001).

En el contexto de creciente hostilidad política ante los migrantes que se vivía en España a inicios de esta década, algunos de los miembros de la asociación aceleran el regreso, debido a su situación irregular. Esta coyuntura les impulsa a reproducir la organización en el país de origen. Según uno de los voceros de la asociación, conformar un colectivo de migrantes y familiares en Ecuador perseguía tres objetivos: mantener los

¹⁴ Dora Aguirre es actualmente asambleísta electa por dicha jurisdicción, y se ubica como la asambleísta más votada entre los electores residentes en el extranjero.

vínculos entre origen y destino; crear mecanismos de codesarrollo y proyectos productivos; y generar una reconstrucción del tejido social organizativo, sobre todo entre jóvenes y mujeres, a partir de la implementación de proyectos de desarrollo (E.P., entrevista, 2009).

Durante ese proceso, Llactacaru sostiene que no recibió respuestas del Estado ecuatoriano, sino más bien de ciertas ONG, entre 2001 y 2002. A través de la vinculación con tales entidades, se organizan eventos de reflexión colectiva sobre la migración. Sin embargo, la asociación ve un momento importante de fortalecimiento organizativo recién en 2005, con la implementación del proyecto MIREDES¹⁵, financiado por el Comité Andino de Servicios¹⁶. Esta red continúa vigente, según Llactacaru, pero se ha debilitado.

Pese a estas actividades realizadas junto con algunas ONG, Llactacaru critica las “visiones paternalistas” que sobre ellos desarrollarían el Estado, los partidos políticos, las ONG y la sociedad en general (E.P., entrevista, 2009). En este sentido, reivindican que se les reconozca como “actores sociales” y que se establezcan “diálogos de igual a igual”.

Presentan esta misma postura respecto del gobierno actual, y sin embargo, afirman que mantienen relaciones de diálogo con la Senami, con el Movimiento País, con el equipo político de Augusto Barrera, alcalde electo de Quito, así como con la asociación Rumiñahui. Esta posición frente al gobierno se explica, además, porque rechazan la ubicación de las ONG como intermediarias de los migrantes en el espacio político (Ídem).

Estos procesos de diálogo, al mismo tiempo, apuntan al objetivo principal de Llactacaru en la actualidad: la formulación de propuestas de políticas públicas en torno a la migración y el desarrollo de mecanismos de exigibilidad hacia los asambleístas electos en el exterior.

Red Regional del Sur

La Red Regional del Sur presenta un proceso organizativo distinto a los de las asociaciones anteriores. El núcleo central de esta organización está formado por una red

¹⁵ Por sus siglas; migrantes, refugiados y desplazados.

¹⁶ Comité Andino de Servicios (CAS) es el nombre que American Friends Service Committee (AFSC), toma en la región andina. AFSC es una organización norteamericana de defensa de derechos humanos, fundada por cuáqueros durante la Segunda Guerra Mundial. Promueve diversas campañas y actividades en torno a la defensa de derechos humanos en varias áreas temáticas y en varios países. En la actualidad ya no funciona en Ecuador.

de organismos de asistencia social de la iglesia Católica¹⁷. La organización surge de un largo proceso, originado hacia la segunda mitad de la década de 1990, incluso antes de la última oleada emigratoria.

Dicho proceso tenía como eje central la oferta de servicios sociales y psicológicos a migrantes, la misma que empezó a ser coordinada entre las sedes de pastoral en las provincias del sur, zona de alta tradición migratoria. Según uno de los miembros de la red, estas acciones coordinadas se organizan en torno a una lógica de “resolución de casos”, aún antes de la conformación formal de la Red del Sur (E.F., entrevista, 2009).

Estas mismas necesidades de resolución de casos les lleva a situarse más allá de la asistencia directa, y por tanto, a buscar mecanismos de incidencia a nivel de gobiernos locales, del congreso nacional y de medios de comunicación; con el objetivo de frenar problemas cotidianos de la población de migrantes y familiares, tales como la extorsión de prestamistas y traficantes –chulqueros y coyoteros- (Ídem).

Estos mecanismos de incidencia se fortalecen a partir de 2002, con la creación del Plan Migración, Comunicación y Desarrollo¹⁸, en el que participan las sedes de pastoral de la región sur (Ídem). No obstante, esta región experimenta un cambio decisivo a mediados de esta década, el cual afecta la orientación de las organizaciones involucradas en el tema de migración en la zona. Con el sustancial incremento de los flujos inmigratorios, los servicios de asistencia reciben a nuevos grupos de población: en su mayoría, trabajadores peruanos, y en menor grado, colombianos. Ello dirige nuevamente las acciones de la pastoral de las provincias del sur hacia el nivel local, y surge, entonces, la propuesta de conformar una red de intervención frente a las realidades específicas que presenta una región con una antigua tradición emigratoria y recientes procesos de inmigración masiva.

Esto ocurre en un momento en el cual se han generalizado en el país ciertas formas de coordinación e interacción entre entidades del Estado, organismos internacionales y ONG. Es comprensible, entonces, que se plantee la lógica de la red, para incluir a organizaciones estratégicas del Estado, así como a sectores de la sociedad civil.

¹⁷ Se trata de la Pastoral de Movilidad Humana, con sedes locales a nivel nacional.

¹⁸ Se trata de una coalición de ONG en la que participan entidades de asistencia social de la iglesia Católica, organismos de cooperación europea y asociaciones de radios populares ecuatorianas y europeas. A partir de su creación, el Plan Migración, Comunicación y Desarrollo se convertirá en una de las organizaciones con mayor incidencia en el tema de migración a nivel nacional.

Si bien la Red Regional del Sur se conforma formalmente de manera reciente (2006), refleja una continuidad respecto de las formas de operación usuales frente a la migración, a través del tipo de acciones y servicios que ofrece, centrados en la asistencia psicológica y jurídica para las poblaciones de emigrantes, así como la promoción de elementos culturales, bajo la idea de promover la integración entre ecuatorianos e inmigrantes.

Por último, esta red se suma a los recientes procesos de participación abiertos por el Estado, que alcanzan un apogeo en la elaboración de la constitución actualmente vigente. De este modo, la Red del Sur apuesta, al igual que las otras asociaciones, por formas de incidencia política en la toma de decisiones del Estado.

Estos son los principales elementos que evidencian los procesos organizativos de las entidades que se aborda en el presente trabajo. En las siguientes líneas se analizará la conformación de las asociaciones de migrantes a partir de dos ejes analíticos. Por un lado, examinaremos la construcción de marcos interpretativos por parte de estas asociaciones, lo cual permitirá profundizar en los discursos y representaciones que construyen su identidad y formas de acción. En segundo lugar, se examinará las estrategias de participación y posicionamiento de las tres organizaciones en el espacio político.

Variaciones estratégicas en los discursos de identidad

Cuando Tarrow (1998) reflexiona sobre la creación de los marcos para la acción colectiva, se detiene a identificar las variaciones que se suscitan en el marxismo y el paso que se da entre las reflexiones de la doctrina inicial de Marx y Engels, a las interpretaciones y significaciones que retoman Lenin, Gramsci, hasta Mao Tse-Tung. Tarrow muestra cómo estos distintos pensadores, a través de variaciones interpretativas, movilizan a distintos sectores, como mecanismos estratégicos. Es así como el maoísmo construyó variaciones del marxismo alrededor de símbolos culturales chinos, y como Lenin defendió “la revolución de la masa obrera a propugnar otra cuya organización y movilización dependía de la elite dirigente” (1998, 161).

Al utilizar este ejemplo de los trastoques del marxismo Tarrow afirma que “los símbolos de un movimiento no derivan directamente de la cultura, ni de las fibras que forman el tejido ideológico, sino que son el resultado de su interacción estratégica en los diferentes y cambiantes escenarios” (1998; 159).

Es en relación a esta noción de variación donde quisiéramos detenernos, para mirar justamente cómo la construcción de la identidad colectiva de las asociaciones de migrantes varía en el tiempo y varía en el uso de los símbolos para interactuar estratégicamente en el escenario político.

Para la identificación de los discursos desde donde se movilizan las asociaciones, en primer lugar se identificará el uso de estrategias discursivas distintas y cambiantes a través de las cuáles se visibilizan, se organizan y transforman sus demandas en el escenario político. Segundo, se plantea que las variaciones discursivas que operan en la construcción de la identidad que adoptan estas asociaciones, pueden ser leídas en tres etapas históricas distintas, aunque en muchos casos aparece superpuestas unas con otras; lo cual lleva a mirar este proceso de identificación como una estrategia de posicionamiento político. Y tercero, estas variaciones estratégicas desde donde se identifican como colectivo, guarda una relación con los distintos significados e intensidades con las que ha sido abordado en el escenario social el tema de la migración.

El uso de las variaciones nos permitirá comprender que las asociaciones de migrantes inciden en el escenario político de a través de variadas intensidades y de múltiples formas. Ello, con el propósito de romper con la reificación que estudios como este suelen efectuar cuando se habla de organizaciones sociales. Por el contrario, entenderemos la visibilidad política de estas organizaciones como un juego de estrategias y discursos en tensión.

La expulsión forzada de finales de los noventa: el primer momento

La migración en el Ecuador no es un tema nuevo -como afirmamos al inicio de este texto-; existe una tradición y una larga data en los procesos de migración internacional. Sin embargo, la migración de finales de los noventa, dada su masividad, así como los nuevos perfiles y características de los migrantes, se convierte en un fenómeno socialmente visible.

Esto implica que, de una migración cotidiana y casi invisible inscrita en las provincias de la zona centro-sur del país, se da paso a una migración masiva con claras implicaciones nacionales y proveniente, sobre todo, de las zonas urbanas de las principales ciudades, como Quito y Guayaquil.

Esta transición en las características y perfiles migratorios se traduce en una serie de expectativas sociales. Y es en este contexto donde la explicación de “la vertiginosa salida” que tuvo mayor eco, y que se difundía por canales formales e informales, fue

que los “ecuatorianos fueron expulsados” como resultado de una crisis política y económica.

El peso de la crisis estructural de los noventa, si bien generó y catalizó la migración, posibilitó también construir en los imaginarios sociales la noción de que los migrantes han sido un resultado directo de esta crisis¹⁹(Eguiguren, 2009). La crisis, en este sentido, se convierte en la ventana para mirar y explicar la salida de cientos de ecuatorianos.

La reproducción social de estos sentidos sobre la migración es alimentada, por ejemplo, por un fuerte discurso mediático de la expulsión, acompañado de imágenes sobre la partida en los aeropuertos de Quito y Guayaquil.

La imagen de hombres y mujeres despidiendo a sus familiares desde la malla de la pista del aeropuerto, se repetía en los noticieros de televisión y en medios impresos como una señal de que la crisis – económica, social y política- del país se había convertido en una crisis de futuro para cada vez más familias ecuatorianas. (Herrera, Carrillo y Torres, 2005: 14).

Esta producción mediática del boom migratorio de finales de los noventa, permitió generar una serie de ansiedades sociales sobre la partida, basadas en narrativas sobre la afectación emocional de los que se quedaron y cómo los migrantes se convierten en las víctimas directas de una serie de proyectos nacionales fallidos (Vallejo, 2004).

En este sentido, la ubicación de las asociaciones de migrantes en un determinado contexto de oportunidad política e histórica, las posicionará en una plataforma con que no contaron ninguna de las numerosas organizaciones de migrantes que se han conformado en el Ecuador desde que toma fuerza el proceso migratorio internacional.

Este es el caso de La Asociación Rumiñahui Hispano Ecuatoriana, cuyo objetivo principal en un inicio fue promover la identidad de los ecuatorianos en la sociedad de destino, mediante, por ejemplo, la realización de ferias gastronómicas y artísticas. Su propósito antes de la oleada migratoria consistía, entonces, en reproducir la ecuatorianidad en destino, como una estrategia de acompañamiento y “solidaridad”. “Pero fue en la oleada que cambia y se redefine Rumiñahui, pues aparecen nuevas demandas” (E,L., entrevista, 2009).

Es en aquel escenario de “ansiedades sobre el porvenir” (Herrera, Carrillo y Torres, 2005: 14) donde los impulsores de la organización procesan y se apropian del discurso de la migración como una expulsión forzada. Esta identificación permite el

¹⁹ Ver María Mercedes Eguiguren (2009) quién reflexiona con mayor detenimiento en la construcción social de la crisis

aglutinamiento, la generación de solidaridad entre sus miembros y su posicionamiento como símbolo de la identidad colectiva de las asociaciones de migrantes. “Nosotros asumimos la migración como una expulsión forzada” (E.G., entrevista, 2009).

La redefinición de Rumiñahui significó identificarse como las víctimas directas de una crisis estructural. En este primer momento de organización y aglutinamiento de la asociación, se recrea, entonces, un discurso de injusticia y sufrimiento para dotar de sentido su identidad colectiva.

Una tarea fundamental de los movimientos sociales es la tarea de identificar agravios vinculados a otros agravios y construir marcos de significados más amplios que pueden encontrar eco en la predisposición cultural de una población y transmitir un mensaje uniforme a quienes ostentan el poder y a otros estamentos (Tarrow, 160).

La autodefinition como las víctimas sociales de un sistema, mediante el discurso de la expulsión, posibilitó a la asociación Rumiñahui Hispano Ecuatoriana, construir una identidad enmarcada en la emotividad de la partida, modelada por un sentido de injusticia, traducido mediante el agravio social y moral de una crisis estructural. “Nosotros vivimos a la migración como un duelo” (E.L., entrevista, 2009).

Y es en esta variación identitaria, que va desde un discurso cultural a un imaginario en tanto víctimas directas de una crisis, que se define al Estado ecuatoriano como el agravante directo, como el causante de su salida, y por tanto, como el principal oponente. Esta construcción del adversario transforma el escenario migratorio en un campo en disputa entre migrantes expulsados y Estado. En este campo, la Asociación Rumiñahui Hispano Ecuatoriana empieza a movilizar estrategias en los niveles simbólico y emocional, destinadas a aglutinar actores y a visibilizarse en el escenario político.

Es así como no resulta casual que las primeras acciones que asume esta asociación, orientada a paliar la afectación emocional de la expulsión, es lo que uno de sus voceros identifica como la “detección de necesidades” (E, L, entrevista, 2009). Esto permite observar que el deber ser de la asociación cambia, ya que la expulsión masiva trae consigo una serie de dificultades antes no avizoradas, una especie de consecuencias inesperadas de las migraciones. Ante ello, la asociación asume una suerte de “ayuda emergente”. En este momento, la expulsión se convierte, entonces, en el motor de los recursos simbólicos que posibilita reorientar las acciones y por ende afianzar una base de solidaridad al interior del grupo.

Estas acciones se orientan hacia temas legales, los cuales se convierten en uno de los principales problemas de los emigrantes en España. La asociación decide emprender un “acompañamiento jurídico”, que significaba facilitar asistencia legal para paliar de alguna forma la incertidumbre del asentamiento, así como ayudar en la formalización de documentos. “Acompañar legalmente” significaba también llevar a cabo acciones que debía asumir el Estado, en confrontación con el cual se asume un liderazgo en este proceso.

De la expulsión a la desestructuración familiar: segundo momento

Para el 2001, la creciente politización de la migración se “manifiesta en la prioridad que ocupa las migraciones internacionales en los debates gubernamentales, en las agendas internacionales y en los organismos de defensa de los derechos humanos” (Araujo y Eguiguren, 2009: 2) En este sentido, la migración internacional a escala global es un tema social y políticamente visible y deja de ser un tema aislado, poco analizado en los debates públicos.

Para comprender de qué forma se da una variación en el discurso de la identidad de las asociaciones analizadas, nos detendremos a evidenciar que el cambio en los escenarios internacionales impulsarán también un giro en los discursos desde donde se redefinen las asociaciones, pues entrado el 2001, aparecen una serie de eventos coyunturales y estructurales que marcarán un nuevo escenario político en la gestión migratoria a nivel global.

Para mediados del año 2000, en España alrededor de un millón de personas se acoge al proceso extraordinario de regularización (Solé y Parella, 2001: 12). Este proceso de regularización irá paulatinamente dibujando “el diseño básico de la política española que coincide con el espíritu del Acuerdo de Shenghen, es decir una asociación directa entre procesos inmigratorios y seguridad” (Carrillo, Delgado, 1998, 24) ²⁰.

En el mes de enero de 2001, entró en vigencia la ley 8/2000 en España, que tiene “como novedad principal que apenas establece distinciones entre los regulares y los sin papeles” (Solé y Parella, 2001:12) Para muchos analistas, el paso de la ley 4/2000 a la 8/2000 en España significó la reducción de varios derechos laborales, de reunificación y asociación.

²⁰ Esta regularización estaba dirigida a los extranjeros que se encontraban en España antes de 1999.

Paralelamente a estas nuevas tendencias de gestión de las migraciones en España, se suscita un evento que provoca una inusitada presencia de los inmigrantes en la opinión pública española –sobre todo en los medios- (Pujadas y Massal, 2002). Se trata del accidente de tránsito en Lorca (2001), en el cual muere un grupo de migrantes ecuatorianos transportados clandestinamente en el camión que los llevaba a su sitio de trabajo.

La modificación de la ley de extranjería, tanto como la visibilidad mediática de la migración producida por el suceso de Lorca, fueron dos de las justificaciones que movilizaron a los migrantes en la llamada “marcha de los 50 Km”, de Lorca hacia Madrid. En este sentido, tanto las acciones de los migrantes, como las de los estados, empiezan a modelar un escenario político desde donde se abordarán las migraciones. Esta visibilidad permitió también evidenciar que las migraciones internacionales a escala global incidían en todas las esferas sociales, de distintas formas y con múltiples implicaciones. Al mismo tiempo, vemos cómo nuevas configuraciones políticas a escala global producirían “consecuencias inesperadas”, en cuanto se refiere a las posibilidades de reproducción social moldeadas por nuevas política migratorias restrictivas²¹.

Es así como en este mismo año, y luego de estos eventos, la asociación de Migrantes Hispano Ecuatoriana, crea su delegación en Ecuador, con dos objetivos: en primer lugar, generar acciones binacionales, es decir, definidas en origen y en destino; y en segundo lugar, direccionar una serie de demandas hacia el Estado ecuatoriano frente a la situación de los que se quedaron. En este sentido, la Asociación de Familiares de Migrantes Rumiñahui 9 de enero empieza a identificar necesidades producidas en las familias tras la expulsión.

Asimismo, a mediados de 2001, en España un grupo de migrantes residentes región autónoma de Cataluña, deciden organizarse y construir una asociación independiente de Rumiñahui: la asociación Ecuador Llactacaru:

Se habló en primer lugar de las reticencias de la Asociación Rumiñahui Hispano-ecuatoriana (Madrid) frente al hecho de que la Asociación que estamos formando se constituya como entidad independiente y de las ventajas y desventajas que comportaría la autonomía en este sentido. Rumiñahui no está conforme con que constituyamos una asociación independiente y prefieren que seamos solo una delegación. Los reunidos

²¹ Otro de los eventos más importantes y que ha sido ya documentado, es el cambio de la gestión migratoria a partir del 11 de septiembre del 2001, en Estados Unidos “momento en el cual la agenda de lucha contra el terrorismo se aplica también en el control de la inmigración” (Araujo y Eguiguren, 2009: 3).

decidieron mantener la postura de crear una asociación independiente que se ha defendido desde las primeras reuniones. (Llactaru, 2001).

En palabras de uno de sus voceros, el objetivo principal de Llactacaru, a más de buscar una autonomía en sus decisiones, es la idea de mantenerse continuamente vinculados con sus familiares en origen. (E.P., entrevista, 2009).

Como se puede observar, el contexto en el que se sitúa a la familia como un objetivo prioritario de las asociaciones, está marcado por el endurecimiento de las políticas inmigratorias en destino, así como por la reproducción de ansiedades sobre la migración construidas mediáticamente y desde la opinión pública en origen. En ese momento, los ojos no estaban puestos en los que se fueron, sino en los que se quedaron; y en ese sentido, el debate sobre la familia se efectúa en términos de desestructuración vs. organización familiar.

Encontramos, entonces, una nueva variación en el discurso, que llevará a las asociaciones redefinir su identidad, pues el ímpetu inicial de la expulsión deberá ser complejizado a través de la movilización de otros recursos simbólicos, que les permitan incidir de forma directa y eficaz en este nuevo escenario, que ya no es el inicial, expresado en las ansiedades del asentamiento.

Ello conduce a pensar nuevamente en la relación entre discursos identitarios de las asociaciones y lecturas sociales de la migración. Siguiendo a Herrera, se puede afirmar que “luego, una vez superada la sorpresa frente a la salida masiva de tantos ecuatorianos y ecuatorianas, otros temas (...) mostraron, otras caras del fenómeno” (Herrera, Carrillo y Torres, 2005 : 14).

El tema de la familia entra entonces en el debate de las migraciones. Por un lado, empieza a posicionarse la idea de recomposición de la familia, a través del concepto de familia transnacional, construido desde la academia, que intenta comprender los reajustes sociales que se producen en la organización social de los cuidados. Por otro lado, tomará fuerza un imaginario de desestructuración, vista como problemática social, que se reproduce mediáticamente, entre otros lugares, desde el Estado. En un discurso pronunciado en el Congreso Nacional, el diputado Germán Astudillo se refiere a la migración en estos términos:

Niños sin padres, ancianos a cargo de adolescentes rebeldes por falta de la figura paterna, jóvenes madres solas a cargo de una familia sin educación, ni oportunidades para salir adelante, los índices más altos de divorcio del país, el fin del concepto de familia, deserción estudiantil, pandillas, aculturación de los adolescentes, desprecio por las tradiciones y culturas propias,

abandono de los campos de cultivo, vagancia, desocupación creciente en las ciudades, ampliación de los cinturones de miseria, violencia juvenil, delincuencia, desabastecimiento de los mercados agrícolas, procesos inflacionarios por altos precios pagados por bienes inmuebles, estas entre otras de las consecuencias. (Reformatoria al Código Penal, primer debate, 02 – 09 – 2000, Acta n° 177, pág. 67-68.)

Las complejas situaciones que emergen de la reorganización familiar de los cuidados, son leídas por estas asociaciones, como realidades que hay que atender desde el “acompañamiento psicosocial”. Es así como las acciones emprendidas en esta segunda etapa se traducen en mediaciones desde el campo experto de la psicología, las cuales intentan reducir o solucionar los problemas psico-emocionales que derivarían de la migración:

La atención psicosocial nace como una demanda de los adultos, y ello nos permite ayudar a través de mecanismos de mediación. Por ejemplo en el caso de las abuelas, existe una brecha generacional con sus nietos, que muchas abuelas no pueden manejar y es allí donde demandan atención y acompañamiento (E,L., entrevista, 2009).

Se puede afirmar, entonces, que los discursos localizados en la familia, que ubican a la migración como causa de problemas que necesitan atención e intervención, permean un imaginario social que va desde sectores oficiales, como el Congreso Nacional, hasta las asociaciones de migrantes. En esa medida, los discursos que forman la identidad de los migrantes se inscriben en los discursos y representaciones hegemónicas sobre la migración.

El emprendimiento: tercer momento

“El sujeto se convierte en su propio Mesías” (Vallejo, 2004: 113)

Una tercera variación identitaria que hemos rastreado en la construcción de los discursos de las asociaciones, es aquella que se remite al fortalecimiento de los emprendimientos, la microempresa y el codesarrollo²². Todos estos discursos aparecen con fuerza durante los últimos años y en algunos casos estas formas de vincular migración y desarrollo también se han convertido en la forma de gestión de las migraciones por parte de los estados.

²² Esto será abordado con mayor profundidad en el apartado sobre estrategias de posicionamiento en los procesos políticos.

Para identificar la reelaboración del discurso identitario en este tercer momento, situamos dos factores que son los que posibilitan fortalecer simbólicamente la identidad del migrante como sujeto emprendedor.

En primer lugar, el rol que cumplen las remesas permitió superar de alguna forma la victimización del migrante ligada a la idea expulsión debido a una crisis estructural. En este sentido, la victimización fue contrastada con una “heroización”, a partir del aporte de este sujeto –el migrante- a la economía nacional a través de las remesas.

Al trazar la trayectoria de la entrada de remesas en el país, se evidencia que desde mediados de los noventa hasta el 2007 existe un crecimiento constante que alcanza una cifra récord en el 2007, con un ingreso neto de 3087 millones de dólares (FLACSO-UNFPA; 2008).

Las remesas han experimentado un crecimiento que puede ser clasificado en tres etapas. Una etapa de crecimiento inicial, que va de 1993-1997 y en la que el incremento anual de remesas promedió los 120 millones de dólares. Una segunda etapa que sería de aceleración, entre 1998 y 2000, en la que el aumento anual promedio de remesas se duplicó, alcanzando los 262 millones. Y la tercera etapa, con una tendencia a la saturación, entre 2001 y 2004, en la que se desacelera el flujo de remesas (...) (Acosta, Villamar, López; 2005:230)

Paralelamente a la victimización y problematización de la migración internacional de ecuatorianos en la esfera social, un imaginario sobre las remesas se posicionaba con fuerza en los discursos oficiales, en la academia, e incluso se promovía desde los organismos de cooperación. Ello significó mostrar o construir otra cara de la migración, aquella que posicionaba el rol de las remesas como aporte al desarrollo. En este sentido, “la migración fue utilizada en metáforas, para hablar del país que se quiere cambiar, y los emigrantes aparecieron como actores importantes del nuevo escenario (...) del país a construir” (Herrera, 2007: 190).

Por otro lado, un segundo factor que permite evidenciar esta variación estratégica consiste en una serie de iniciativas y proyectos en que las asociaciones de migrantes empiezan a participar. Es así como a partir de los emprendimientos y las microempresas, se generan iniciativas y vínculos que las asociaciones construyen con la cooperación, así como con una serie de ONG.

Estos dos factores permite a las asociaciones de migrantes, tanto a Lactacarú, como a Rumiñahui, y a la Red regional del Sur, “encaramarse fuera de la degradada situación en la que los discursos hegemónicos han colocado [a los migrantes]” (Vallejo,

2004: 113). Y es en esta tensión entre visibilidades y estrategias, donde las asociaciones de migrantes se insertan y, por tanto, reproducen una lógica de funcionalidad frente a determinados proyectos basados en el modelo económico vigente:

“Necesitamos que la gente se meta en la cabeza que pueden ser empresarios exitosos” (E.P., entrevista, 2009);

“una persona vulnerable no puede ser productiva en todos sentidos” (E. G, entrevista, 2009).

“(…)los migrantes estamos dispuestos a jugárnoslas para generar riqueza espiritual y cultural, a generar un espacio económico para juntos construir desde allá y desde aquí un país diferente” (Juan Carlos Manzanilla, 2002, discurso emitido en el Congreso Nacional).

El uso estratégico de una representación de “sujeto emprendedor”, permite a las asociaciones de migrantes, por un lado, garantizar su subsistencia a través de la participación en proyectos de la cooperación internacional. Pero por otro lado, las asociaciones que se insertan en estas formas de intervención, reproducen el discurso hegemónico de la “governabilidad neoliberal” (Vallejo, 2004: 117). Pues el proyecto migratorio, en términos de Vallejo, ha sido entendido como un proyecto individual, con claras metas privadas que terminan sustituyendo al Estado desarrollista de los años setenta, y es en esta superposición de los roles entre el mercado y la gobernabilidad neoliberal donde las asociaciones encuentran un contexto de oportunidad que catapulta sus estrategias de acción.

Estrategias de participación y posicionamiento en el espacio político

En cuanto a las estrategias de participación y posicionamiento de las asociaciones de migrantes en el espacio político, se puede identificar tres elementos que caracterizan a la acción colectiva de estos grupos: la protesta en el espacio público, su relación con las ONG, y el posicionamiento frente a los estados como interlocutores de sus demandas²³. Estos elementos se examinarán en cuanto reflejan tres formas de estrategias

²³ En cuanto a los estados, se entiende que nos referimos al estado de origen y al de destino. Si bien esta investigación se concentra en las asociaciones de migrantes dentro del contexto ecuatoriano, es necesario tener presente que, dado el proceso social que es la base de su identidad y de sus reivindicaciones, las acciones que estos grupos desarrollan tienen características transnacionales.

de las organizaciones: la politización de sus demandas, su participación en los procesos políticos y la negociación con el Estado.

Estrategias para la politización de las demandas

Entre las estrategias que estas asociaciones despliegan para posicionarse en el espacio político, cabe anotar algunas formas en que han perseguido la politización de sus demandas.

En primer lugar, han buscado volverse visibles en el espacio público, a través de formas relativamente comunes de protesta, como las marchas o toma de lugares públicos y simbólicos, tales como iglesias. Tanto la Asociación Rumiñahui como Ecuador Llactacaru emplearon este tipo de estrategias en sus inicios, ante una progresiva tendencia restrictiva en las políticas inmigratorias españolas²⁴; sumada a ciertos detonantes, entre ellos, la muerte de varios migrantes ocasionada por accidentes relacionados con condiciones laborales precarias o por delitos raciales²⁵.

Entonces a raíz de este accidente la organización allá Madrid, España toma la iniciativa de llegar y sensibilizar justamente al gobierno español, a los españoles, al príncipe de España, todos quienes forman la sociedad española, a que detenga esa expulsión masiva que se pretendía hacer. Entonces empiezan con una marcha a pie que va desde Lorca, Murcia, la famosa caminata de los 50 kilómetros, donde estuvieron los compañeros de Rumiñahui ya encabezando y se logra que esta marcha, empezaron con 12 personas, pero cuando se llegó, se llegó con... más de... prácticamente cien mil personas que se adhirieron (...). (E.G., entrevista, 2009).

Además de contribuir a poner en disputa las formas de inserción de los migrantes en la sociedad española, estas acciones también representan una forma de construcción de identidad de las asociaciones. En ambos colectivos, se marca una diferencia respecto de anteriores grupos de migrantes ecuatorianos en España. Al respecto, los miembros de las nacientes Rumiñahui y Llactacaru se reconocen como parte de un proceso migratorio nuevo, con características y condiciones distintas; y de ahí la necesidad de distinguirse de agrupaciones o procesos anteriores, motivados por elementos culturales –y no políticos- (E.P.; E.L.; entrevistas, 2009), que reflejarían una migración voluntaria, incluso “placentera”:

²⁴ La más importante de estas medidas es la aprobación de la Ley 8/00-, que sancionaba con deportación a los trabajadores irregulares. Previo a la aplicación de esta legislación y –en parte- como respuesta a las movilizaciones masivas que se generaron en rechazo de la misma, el gobierno español realizó tres procesos masivos de regularización laboral.

²⁵ Un ejemplo de ello es el accidente de Lorca en enero de 2001. En la misma época, se genera un importante momento de protesta ante el asesinato de Wilson Pacheco, un inmigrante ecuatoriano en Barcelona, a manos de un guardia de seguridad privada del centro de recreación Maremagnum. Al respecto, se generó un debate sobre el origen del hecho, que las autoridades ubicaron como accidental, mientras que para los colectivos de migrantes, se trató de un delito de odio racial.

Es así que cuando surge en el 98 o 99 la crisis bancaria donde se complementa justamente la vulnerabilidad, yo creo que hasta de la vida jurídica de nuestro país, es cuando la gente masivamente empieza a salir porque no había credibilidad, sus ahorros incautados y la gente dijo bueno, tenemos que salir. Y la primera opción, claro de nosotros, porque tenemos una migración por décadas, pero nuestra migración no es que ha sido por comercio, cultural, así como los Otavalos y Cañar y Azuay, donde empezó con los sombreros de la paja toquilla, y más por comercio, pero esta vez cambió la situación, ¿no? (E.G.; entrevista, 2009).

Entonces era consecuencia de la crisis y todos debíamos ser corresponsables de esa situación, ¿no? (Ídem).

Se podría sostener, por tanto, que las primeras estrategias de politización de las demandas de estos grupos se alimentan también del discurso que les confiere identidad²⁶, y llevan así a una politización de la migración ecuatoriana, al posicionarse en el contexto específico de la crisis y de lo que ellos entienden como una expulsión.

Esta misma estrategia discursiva es la que catapulta las demandas que más adelante plantean en el contexto de origen, una vez que han iniciado el proceso organizativo en Ecuador. Si bien el contexto político ecuatoriano ofrece una plataforma para acciones de protesta y de movilización política durante los primeros años de la década de 2000, la articulación de los migrantes a estas luchas les permite posicionar determinadas reivindicaciones específicas y exclusivas, claramente ligadas al discurso de la expulsión, y en consecuencia, a una necesidad de “resarcimiento” por parte del Estado.

Y como le digo, [participar en el derrocamiento de Mahuad] fue una obligación moral de nosotros con los que estaban allá... porque nosotros nos sentimos que fuimos una consecuencia de eso (E.G., entrevista, 2009).

Me acuerdo que en algunas reuniones estuvimos ahí justo tratando que en las mesas de diálogo se meta el tema migratorio porque no había (...) nosotros lo que decíamos justamente era que se deben crear unas políticas que cubran no solamente a la persona que salió, sino a la familia acá (...) que se debe propender acá a la educación con los niños que se quedaban, un apoyo, porque había unas consecuencias, que se sabe, psico-afectivas (...) que se baje justamente el costo de las remesas, se pedía que quienes tenían esas deudas chulqueras, a través de la Corporación Financiera Nacional (...) se compre esas deudas, y sea al Estado al que el deudor pague (...). (Ídem).

Esta suerte de compensación a la que apuntarían ciertas demandas –por lo menos, las planteadas por la asociación Rumiñahui-, no dejan de apelar a una permanente lucha por el reconocimiento, que atraviesa las acciones de estos colectivos durante la última

²⁶ Este aspecto ha sido analizado ya en el apartado sobre los marcos interpretativos y discursos identitarios.

década. Tal lucha se expresa, por ejemplo, en ciertas perspectivas de los entrevistados sobre el tipo de representación que los migrantes deberían tener en el Estado:

Nosotros habíamos dicho, hay más de tres millones de ecuatorianos fuera del país, y seis personas es súper insuficiente para que representen y vayan a exigir las propuestas que se hagan desde la... exigibilidad de políticas justamente, y si nos ponemos a contar tres millones afuera y las familias acá, yo creo que deberíamos ser un potencial político (...) y yo digo haría mucho, pero lamentablemente desde ahí no estamos de acuerdo, seis personas, difícil, usted sabe que para tener en el congreso seis personas lamentablemente tienen que entrar a (...) porque la palabra directa es negociar. Entrar a hacer *lobbying*, a proponer, a tener apoyo, a dar prioridad, que se tome en la agenda y se tengan los puntos que se planteen, y se tenga el apoyo de la mayoría para que se tome realmente en cuenta (...). Y más que todo tienen que ser verdaderos actores y participantes de base, que han vivido y han estado activamente participando, para que sepan qué es lo que se quiere hacer (...) (E.G., entrevista, 2009).

Desde la perspectiva de esta organización se pone en cuestión no solamente a la representación, sino también a las formas de negociación y de posicionamiento que de ella derivan en el entramado político. El reconocimiento dentro de la política formal pasa por una representación particularista, ligada directamente a su identidad en tanto migrantes.

Esto dirige la atención hacia otro elemento que conforma las estrategias de participación de las asociaciones; precisamente sus formas de participación en los procesos políticos. Al respecto, es necesario entender que, si bien estas asociaciones adoptan formas de protesta y de cuestionamiento explícito a los estados, la principal forma de inserción en los procesos políticos actuales se da a través de su especialización como organismos de lo que se conoce como “tercer sector”.

Formas de participación en los procesos políticos

Se observa, así, dos tipos principales de acción de las organizaciones: por un lado, todas ellas afirman ejercer formas de “incidencia política” frente a los estados; y por otro lado, mantienen diferentes tipos de proyectos comunitarios o sociales, tales como la oferta de servicios psicológicos o jurídicos o la promoción de actividades productivas.

De hecho, esta estructura mantiene articuladas a las organizaciones durante la mayor parte de su vida como colectivos de migrantes organizados. Tras los primeros momentos de actividad política en el espacio público (2001, 2002), las organizaciones empiezan a desarrollar proyectos orientados al desarrollo, hasta que alrededor de 2006, con el cambio de gobierno, se reactiva un énfasis de las asociaciones en posicionarse frente a un contexto político más amplio en el país. Es entonces que adoptan una postura de rechazo –en el caso de Rumiñahui- o diálogo –Llactacaru, Red del Sur- frente al gobierno actual (E.L.; E.P.; E.F.; entrevistas, 2009).

En cuanto a la etapa en la cual la gestión de proyectos pasa a ser la forma principal de participación de las asociaciones, es pertinente explorar en algunas de las implicaciones de estas formas de acción, en cuanto se conectan con ciertos procesos políticos vigentes.

Al respecto, se puede tomar claves de la perspectiva crítica de Edison Hurtado, quien define al proyecto de desarrollo como un “dispositivo experto-tecnocrático para realizar actividades que involucran aspectos económicos, sociales, políticos, culturales [que] usualmente se enmarcan en el “mejoramiento” de las condiciones de vida de las sociedades consideradas pobres” (Hurtado, 2006).

No es la intención de este trabajo afirmar que las asociaciones de migrantes analizadas corresponden a una tecnocracia. Más bien, lo que se quiere resaltar, es un conjunto de mecanismos de operación que adoptan, durante la última década, ciertas agrupaciones que se auto-definen como organizaciones de base (E.F; E.L.; E.O, entrevistas, 2009) y cuyas formas de acción, no obstante, se asemejan a aquellas características de las ONG.

Planteamos, al respecto, que las dinámicas migratorias contemporáneas han pasado a tratarse, desde diversos sectores, a través de un vínculo cada vez más explícito entre migración y desarrollo²⁷. Efectivamente, este vínculo ha sido promocionado desde organismos internacionales y de cooperación internacional a partir de dos supuestos –no del todo contradictorios–: el primero sostiene que la migración sería un efecto de la “falta” de desarrollo en ciertas zonas, y por tanto, un problema a resolver a través de la generación de desarrollo; y el segundo, transmite la idea de que la migración –canalizada y controlada por medio de determinadas políticas– generaría efectos de desarrollo tanto en origen como en destino.

Al indagar en las asociaciones acerca la proximidad de sus repertorios de acción con aquellos de las ONG, éstas sostienen que existe una diferencia principal: la auto-gestión (E.P.; E.L.; E.O, entrevistas, 2009). Es decir que, mientras las ONG contarían con recursos propios o financiación permanente, las asociaciones de migrantes llevarían a cabo un trabajo voluntario y basado en la auto-gestión. Si bien ésta puede ser efectivamente una diferencia importante, que incluso establece un margen de autonomía política, como señalan los entrevistados; las asociaciones no dejan de evidenciar paralelismos significativos con las lógicas de operación que sigue el tercer sector.

²⁷ Para una profundización de este argumento en el caso de los países andinos, ver Araujo y Eguiguren, 2009; Domenech, 2009.

En el presente estudio, proponemos entender dichos paralelismos en tanto inscritos en un contexto más amplio, en el cual las relaciones entre los estados y la sociedad están permeadas por ciertas directrices hegemónicas supra-nacionales, que promueven determinados tipos “deseables” de participación, sociedad civil y deliberación, y en consecuencia, limitan otros modos de acción política (Hurtado, 2006).

En el caso de las asociaciones de migrantes, cada una de ellas ha recibido financiamiento de ONG que intervienen sobre migración para la ejecución de determinados proyectos²⁸. El caso de la Red Regional del Sur se diferencia de las relaciones con las ONG que mantienen las otras asociaciones, pues en este caso, la propia organización representa a sectores no gubernamentales de asistencia social. Si se suma a ello los organismos de servicios sociales del Estado que integran la Red Regional del Sur, esta organización resulta una clara muestra del tipo de interacciones que se han desarrollado entre determinadas organizaciones sociales, Estado y cooperación o asistencia internacional.

Una mirada retrospectiva a los proyectos o acciones desarrolladas bajo la lógica de la cooperación, arroja una tendencia hacia la gestión de la migración en términos muy similares, que se reproduce desde las entidades estatales hasta las asociaciones de migrantes. Un ejemplo de ello está en la oferta de servicios psicológicos, los cuales se encuentran presentes en los repertorios de acción de cada una de las organizaciones estudiadas. Este tipo de intervención sobre la migración también se ha contemplado en políticas anteriores o actuales del Estado ecuatoriano y español, así como en proyectos de intervención de la cooperación internacional²⁹. Otro ejemplo de cómo permean las directrices internacionales acerca de la sociedad civil, es la orientación prioritaria hacia las mujeres dentro de los proyectos de las asociaciones (E.P.; E.O.; entrevistas, 2009).

Cabe, entonces, destacar que una de las principales estrategias de participación de las asociaciones de migrantes en los procesos políticos se relaciona con la especialización, tecnificación y adquisición de experticias propia de las exigencias

²⁸ Las ONG más importantes que han financiado o colaborado de otras formas con las asociaciones de migrantes provienen de distintas iglesias (jesuitas, cuáqueros), de la cooperación española o italiana.

²⁹ Las tres organizaciones actualmente mantienen distintas formas de atención psicológica para la población migrante. En el caso del Estado, ver Plan Nacional de Ecuatorianos en el Exterior (MRREE, 2001) y programas actuales de la Senami (www.senami.gov.ec); para el caso del Estado español revisar Gil, 2006 y Fresneda. Los resultados de este tipo de servicios en el Ecuador no han sido objeto de alguna sistematización o análisis crítico. En el caso de la inmigración a España, la postura de Gil es crítica frente a la asistencia social hacia los inmigrantes, mientras que el estudio de Fresneda se hace desde la psicología.

internacionales que autorizan las nuevas formas de intervención sobre lo social. Al respecto, seguimos la reflexión de Sandra Gil:

En este contexto [-el del gobierno liberal avanzado-] proliferan los saberes expertos orientados hacia la intervención selectiva, especialmente en el campo de las políticas sociales. Hay especialistas en toxicomanías, mujeres, maltratadas e inmigrantes, así como instituciones específicas para esos grupos, desde el momento en que son definidos como *poblaciones problema*³⁰ (Gil, 2006: 26).

Estrategias de negociación con el Estado

Por otra parte, una última instancia en la que se manifiestan estrategias de posicionamiento en la escena política por parte de las asociaciones de migrantes, tiene relación con la negociación de sus reivindicaciones en el Estado y en el sistema político.

Si bien nos centraremos en la negociación entre las asociaciones y el Estado de origen, es preciso referirse a los momentos iniciales de disputa con el Estado español, por tratarse de la etapa inicial de Rumiñahui y Llactacaru.

Ambas asociaciones surgen en un momento de intensa disputa frente al endurecimiento de las políticas inmigratorias españolas. En ese contexto, la articulación con el movimiento de inmigrantes –los “sin papeles”- resulta clave para tomarse el espacio público y posicionar sus demandas. Tanto Rumiñahui como Llactacaru se fortalecen como organización a partir del momento de protesta que provocó la Ley de Extranjería y otros sucesos en la coyuntura política española, pues además del apoyo de asociaciones de inmigrantes de otras nacionalidades, tienen el respaldo de organizaciones locales pro derechos humanos, pacifistas y de izquierda (E.T.; E.P.; E.L.; entrevistas, 2009). De este modo, Llactacaru y Rumiñahui identifican como momentos fundacionales a la “Asamblea de los sin papeles” y a la “Marcha de los 50 kilómetros”, respectivamente. Ambos eventos se consolidan en una plataforma de activismo por los derechos de los inmigrantes en España.

Mientras tanto, en Ecuador, el clima de protesta social manifiesta similar efervescencia, dirigida, sin embargo, a conflictos de origen nacional, en una agenda donde la migración aún no se posiciona. Si bien tanto Rumiñahui como Llactacaru habían optado por separarse de las organizaciones políticas ecuatorianas en destino³¹; la primera de éstas cambia su postura en el marco de las movilizaciones indígenas y de otros sectores sociales. En una apelación al vínculo entre migración y crisis, los

³⁰ Énfasis en el original.

³¹ Algunos partidos políticos, así como el movimiento indígena, hicieron en esa época algunas giras a España y se entrevistaron con ambas asociaciones; las mismas que decidieron mantenerse al margen de las tendencias políticas ecuatorianas. Ver: www.llactacaru.org, www.ruminahui.org.

promotores de la asociación Rumiñahui en Ecuador trabajan en la organización de madres y abuelas de migrantes, las cuales se unen a las protestas en contra de las políticas económicas y sociales inmediatas a la dolarización. Como resultado de ello, en 2002 la asociación Rumiñahui participa, en alianza con el movimiento indígena, en las mesas de diálogo efectuadas entre los sectores sociales y el presidente Gustavo Noboa.

No obstante, durante estas negociaciones, las reivindicaciones del colectivo no apuntan al régimen político y económico en general, sino que se limitan a conseguir el Fondo de Ayuda, Ahorro e Inversión para el Migrante, e intentan obtener del Estado la compra de deudas adquiridas por los migrantes con prestamistas irregulares, así como la disminución de costos en los envíos de remesas (E.G, entrevista, 2009).

Ello marca el carácter reivindicativo –y no transformativo- que se evidencia en las propuestas que más adelante plantearán las asociaciones de migrantes frente al Estado ecuatoriano. En los tres casos, las demandas ante el Estado se caracterizarán por mecanismos ocasionales de cabildeo directo (E.P.; E.L.; E.G.; entrevistas, 2009), generalmente poco articuladas con otros movimientos u organizaciones.

No obstante, se evidencian algunos cambios en las demandas planteadas por las asociaciones. Efectivamente, si en un inicio las reivindicaciones estaban orientadas a obtener montos de financiamiento estatal, en la actualidad se demanda acciones del Estado en el terreno político. En este sentido se disputa, por ejemplo, la representación de los migrantes en la Senami y en la Asamblea Nacional. Como se mostró en páginas anteriores, respecto de esta última, se reclama un mayor número de asambleístas; y en cuanto a la Senami, se reivindica la presencia de un migrante como ministro³².

Por otra parte, las asociaciones participaron en la convocatoria a propuestas de la sociedad civil que abrió la Asamblea Constituyente instalada en 2007. Las demandas en torno a migración fueron procesadas en la constitución vigente, que contiene numerosos artículos sobre el tema; entre ellos, el derecho a la ciudadanía universal, la ampliación de derechos políticos para los extranjeros residentes en el país y la prohibición de discriminación por estatuto migratorio.

Algunos miembros de las asociaciones reivindican esta ampliación en los derechos relacionados con migración como una conquista propia (E.M.; E.C.; E.P.; entrevistas, 2009). Si bien sería pertinente tomar en cuenta la presencia de otros agentes

³² Al indagar sobre el bajo desempeño del anterior ministro de la Senami (William Murillo, quien fue designado en el cargo precisamente por “ser migrante”) uno de los entrevistados argumentó que el fracaso se debió a que Murillo no provenía de ningún proceso organizativo en torno a la migración, al mismo tiempo que insistió en la necesidad de un migrante en este ministerio (E.P., entrevista, 2009).

políticos en el cabildeo para la inclusión de estos artículos en el proceso constituyente, cabe destacar este aspecto como una posible evidencia de que las asociaciones estarían ampliando su espectro de demandas para incluir a aquellas planteadas por las asociaciones de inmigrantes en el Ecuador –principalmente las colombianas-.

No obstante, esto también podría tener un componente estratégico, en la medida en que permite posicionarse y fortalecerse frente a un gobierno que muestra posturas y discursos inclusivos frente a la población emigrante, al mismo tiempo que mantiene políticas restrictivas y excluyentes ante los inmigrantes –en concreto, aquellos de origen colombiano-.

Conclusiones o tensiones irresueltas

A manera de reflexiones finales, en estas líneas dejaremos planteadas algunas ideas que, consideramos, requieren de mayor profundización en nuevos ejercicios de análisis sobre la acción política de los migrantes en el contexto nacional –y transnacional- de la última década.

En primer lugar, se puede llamar la atención sobre las asociaciones analizadas en tanto formas de acción colectiva. Si se toma a la acción colectiva como una forma de identificar ciertas reivindicaciones respecto de la configuración desigual de las sociedades, y posicionarlas creativamente en el espacio público; se puede afirmar que las asociaciones de migrantes consiguen configurar acciones políticas, en la medida en que su proceso organizativo se impulsa en lo que hemos identificado como variaciones en el discurso identitario.

Sin embargo, si bien existe un complejo ejercicio discursivo por parte de las asociaciones, orientado a legitimar sus acciones en el escenario político, se puede observar una dificultad para traducir estas narrativas en demandas concretas susceptibles de articularse a plataformas más amplias de lucha social.

En efecto, la mayor parte de acciones que presentan estas asociaciones se repliegan hacia efectos inmediatos que derivarían de las dinámicas migratorias. Tales acciones conforman una suerte de nichos de acción que se busca reproducir, a partir de la lógica de especialización y compartimentalización característica de las ONG. En este sentido, la provisión de servicios especializados parecería agotar las formas de participación de las organizaciones en el espacio político.

Esto refleja también una clara tendencia que manifiestan las organizaciones a asumir lenguajes y prácticas promovidas por lógicas dominantes. Esto se evidencia en el

uso que las asociaciones hacen de los discursos sobre la familia y el desarrollo, así como en los proyectos que implementan frente a estas problemáticas; sin cuestionar los supuestos que relacionan la migración con ciertos principios normativos sobre la familia y el desarrollo. No obstante, ciertos momentos en los procesos organizativos también evidencian el potencial de las asociaciones en relación con el cuestionamiento de los órdenes establecidos. En ese sentido, la articulación con otras organizaciones de migrantes, orientada a establecer una presencia en el espacio público, genera la posibilidad de que los inmigrantes se posicionen como interlocutores de las políticas restrictivas impuestas por los estados de destino.

En tercer lugar, y en relación con el contexto ecuatoriano, esta posibilidad de efectuar planteamientos críticos se presenta como más lejana. En un contexto de oportunidad donde las formas de participación e institucionalización de la problemática parecen haber sido desplegadas por iniciativas estatales –por ejemplo, la asignación de seis escaños a asambleístas en el exterior, planteada por el gobierno y no como una demanda social-; cabe preguntarse qué queda para las asociaciones de migrantes. Si bien el momento actual puede ser muy reciente como para efectuar un análisis al respecto, parece ser que se configuran dos posturas frente a un Estado que se plantea como progresista respecto del tema: por un lado, aparece una posición radical de rechazo frente al proyecto político estatal, que puede constituir una forma de capitalización política y de legitimación, pero al mismo tiempo, presenta la limitación de cerrar todo canal de interlocución con el Estado, y por tanto, de reivindicación o de conquista social. Por otro lado, aparece una postura de negociación ocasional, que en ese sentido, generaría más oportunidades de conseguir ciertas demandas ante el Estado, pero requiere de una clara articulación de éstas, así como de un amplio apoyo entre las bases.

Por último, creemos importante destacar una constante que hallamos en las investigaciones paralelas desarrolladas en el marco del presente proyecto. En varias de estas investigaciones, aparece una relación entre organizaciones sociales, entidades especializadas del tercer sector, y formas institucionalizadas de participación en el Estado. Es pertinente preguntarse, en este sentido, sobre los significados de estas relaciones en términos de un régimen político que estaría en juego; pues al parecer se ha institucionalizado una lógica de canalización de las luchas políticas a través de vías previamente autorizadas de deliberación y participación. A la vez que las desigualdades se procesan únicamente a partir de una relación problemática y siempre irresuelta con el

desarrollo, y no a partir de cuestionamientos más profundos sobre dicho modelo de desarrollo.

Bibliografía

- Acosta, Alberto, Susana López y David Villamar (2006). *La migración en el Ecuador. Oportunidades y amenazas*. Quito: Corporación Editora Nacional.
- Alianza País (2006). “Política de migración. El rescate de la Patria es tarea de todos y de todas”. *Plan de gobierno de Alianza País 2007 – 2011*.
- Araujo, Lorena (2009) “El voto a la distancia: un ritual de pertenencia”. Tesis previa a la obtención del título de Maestría en Ciencias Sociales con mención en Sociología. Quito: FLACSO Sede Ecuador.
- Boccagni, Paolo (2008) “Come funziona un campo sociale transnazionale? Uno Studio etnográfico sulla migrazione ecuatoriana”. Tesis Doctoral. Università di Trento. Dottorato in Sociología a Ricerca Sociale.
- Camacho, Gloria (2004). “Feminización de las migraciones en Ecuador” en Hidalgo, Francisco (editor). *Migraciones. Un juego con cartas marcadas*. Quito: PUCE - Abya-Yala – ILDIS – CINDES - PMCD.
- Carrillo, María Cristina (2005). “Las mujeres en los procesos migratorios” en Prieto, Mercedes (editora). *Mujeres ecuatorianas. Entre la crisis y las oportunidades. 1990 – 2004*. Quito: CONAMU – FLACSO – UNFPA - UNIFEM.
- De la Vega M., Pablo y Luis Tupac Yupanqui (2004). “Elementos para una política migratoria” en Hidalgo, Francisco (editor) *Migraciones. Un juego con cartas marcadas*. Quito: Abya-Yala – ILDIS-FES.
- Domenech, Eduardo (2009). “Avatares de la política migratoria en Bolivia: el Estado y los emigrantes como nacionales en el exterior”. En *Migraciones contemporáneas: contribución al debate*. La Paz: CIDES – UMSA (En prensa).
- Ecuador Llactacaru. Varias actas de sesión, período 2001-2002, en <http://www.llacta.org/organiz/llactacaru/actas/actindex.htm> (Visitado junio 2009).
- Herrera, Gioconda (2008) “Políticas migratorias y familias transnacionales: Migración ecuatoriana en España y Estados Unidos” en Gioconda Herrera y Jacques Ramírez (editores) *América Latina migrante: estado, familia, identidades*. Quito: FLACSO - Ministerio de Cultura.
- Herrera, Gioconda (2007). “Ecuatorianos/as en Europa: de la vertiginosa salida a la construcción de espacios transnacionales” en Yépez, Isabel y Gioconda Herrera (editoras) *Nuevas migraciones latinoamericanas a Europa. Balances y desafíos*. Quito: FLACSO – OBREAL – UCL – UB.

- Herrera, Gioconda, María Cristina Carrillo y Alicia Torres (2005). “Introducción” en *La migración ecuatoriana. Transnacionalismo, redes e identidades*. Quito: FLACSO – Plan Migración, Comunicación y Desarrollo.
- Hurtado, Edison (2006). *Exporting democracy: apuntes sobre el campo-aparato de la cooperación internacional para la democracia*. Colección Monografías, N° 23. Caracas: Programa Cultura, Comunicación y Transformaciones Sociales, CIPOST, FaCES, Universidad Central de Venezuela.
- Kyle, David (2000). *The Transnational Peasant: Migration Networks and Ethnicity in Andean Ecuador*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
- García Linera, Álvaro (2004) “Movimientos sociales ¿Qué son? ¿De dónde vienen?” en *Barataria*, N° 1, de octubre a diciembre de 2004.
- Gómez, Águeda (2001) “Indigenismo y Movilización Política en América Latina: Los Tawahka”. Tesis Doctoral. Universidad Santiago de Compostela, USC.
- Goycochea, Alba y Franklin Ramírez (2002) “Se fue, ¿a volver? Imaginarios, familia y redes sociales en la migración ecuatoriana a España (1997-2000), en *Íconos, Revista de Ciencias Sociales*, N° 14, agosto 2002. Quito: Flacso – Ecuador.
- Gratton, Brian (2005). Ecuador en la historia de la migración internacional: ¿modelo o aberración? en Herrera, Gioconda, María Cristina Carrillo y Alicia Torres (Eds.) *La migración ecuatoriana. Transnacionalismo, redes e identidades*. Quito: FLACSO – Plan Migración, Comunicación y Desarrollo.
- Jokish, Brad y David Kyle (2005) “La transformación de la migración transnacional del Ecuador, 1993-2003” en Herrera Gioconda, María Cristina Carrillo y Alicia Torres (Eds.) *La migración ecuatoriana. Transnacionalismo, redes e identidades*, Quito, FLACSO – Plan Migración, Comunicación y Desarrollo.
- McAdam, Doug, John D. McCarthy y Mayer N. Zald (1999). *Movimientos sociales: Perspectivas comparadas. Oportunidades políticas, estructuras de movilización y marcos interpretativos culturales*. Madrid: Ediciones Istmo.
- Moreno, Paola (2007). “El proceso electoral de los ecuatorianos en el exterior: reflexiones para un debate sobre la participación en contextos de migración”. Quito: SJRM - ILDIS-FES.
- Ponce Leiva, Javier (editor) (2005). *Emigración y política exterior en Ecuador*. Quito: FLACSO - Abya-Yala – CEI - AFESE.
- Portes, Alejandro, Luis Guarnizo y Patricia Landolt (2003). *La globalización desde abajo: transnacionalismo inmigrante y desarrollo. La experiencia de Estados Unidos y América Latina*. México D.F.: FLACSO Sede México.
- Pujadas, Joan J. y Julie Massal (2002). “Migraciones ecuatorianas a España: procesos de inserción y claroscuros” en *Íconos, Revista de Ciencias Sociales*, n° 14, agosto de 2002. Quito: FLACSO Sede Ecuador.

Ramírez, Franklin y Jacques Paul Ramírez (2005). “Redes transnacionales y repertorios de acción migratoria: de Quito y Guayaquil para las ciudades del Primer Mundo” en Herrera, Gioconda, María Cristina Carrillo y Alicia Torres (editoras). *La migración ecuatoriana. Transnacionalismo, redes e identidades*. Quito: FLACSO – Plan Migración, Comunicación y Desarrollo.

República del Ecuador. Registro Oficial del 5 de marzo de 2002.

Vallejo E., Andrés (2004). “El viaje al norte. Migración transnacional y desarrollo en Ecuador” en Escrivá, Ángeles y Natalia Ribas (coordinadoras) *Migración y desarrollo. Estudios sobre remesas y otras prácticas transnacionales en España*. Córdoba: Consejo Superior de Investigaciones Científicas - Instituto de Estudios Sociales de Andalucía.

Vertovec, Steven (2004) “Migrant Transnationalism and Modes of Transformation” en *International Migration Review*. Vol. XXXVIII, N° 3, Otoño 2004. New York: Center for Migration Studies of New York.